

Jefatura de Hacienda de dicho Estado, que procedió al embargo del establecimiento de tipografía y encuadernación, situado á la espalda del palacio de la ciudad de Guadalajara, suponiéndolo de la propiedad del C. Isaac Banda, hermano del quejoso, y como responsable éste ante la Tesorería General de la Nación, por escritura de fianza otorgada por valor de tres mil pesos á favor del fisco federal, caucionando el manejo del C. Pagador de la 1.<sup>a</sup> Brigada de Artilleros, con cuyo acto reputa el promovente violadas en su persona, las garantías que reconoce la Carta fundamental de la República en sus arts. 1.<sup>o</sup> y 16.<sup>o</sup> Visto el informe justificado de la autoridad responsable de los actos que se reclamaban lo pedido por el C. Promotor fiscal: la prueba rendida por el promovente: a sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente; y.

Considerando: que aunque son cuestionables en un juicio de otra naturaleza que el presente, los derechos que alega en su favor el C. Sinforoso Banda, es un principio establecido en las leyes vigentes, que debe asegurarse el interes fiscal: que en consecuencia, la Jefatura de Hacienda ha obrado estrictamente con arreglo á la ley, limitándose á asegurar á la Hacienda pública, embargando los bienes que aparecían obligados á la responsiva del C. Isaac Banda. Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 constitucionales y ley de 20 de Enero de 1869, se decretó: que se confirmase y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Jalisco, que declaró: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Sinforoso Banda, contra el procedimiento de que se queja.

Devuélvanse estas actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que for-

maron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—M. Auza.—José Arteaga.—Ignacio M. Altamirano.—E. Montes.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 24 de 1875.—Enrique Landa, oficial mayor,

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Francisco Mesa, contra los procedimientos del Jefe Político de Piedragorda, por violacion de garantías.*

*Pedimento del C. Promotor Fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor Fiscal dice: Francisco Mesa solicitó en 12 de Setiembre del presente año, el amparo de la justicia federal, contra la sentencia dictada por la autoridad política de Piedragorda, condenándolo á la pena de muerte. El quejoso refiere, que fué juzgado como receptor de ladrones, sin que se guardaran los procedimientos legales, con infraccion de los arts. 1.<sup>o</sup>, 26, 20 en sus fracciones 3.<sup>o</sup>, 4.<sup>o</sup> y 5.<sup>o</sup> y 126 de la Constitucion federal, y ademas que se falta al 22 por haber sido engrillado durante su prision en Piedragorda. Admitido el escrito de queja, despues de ser ratificado, se pidió al Jefe Político de Piedragorda, el informe de que habla el art. 9.<sup>o</sup> de la ley de 20 de Enero de 1869, y en contestacion, la autoridad responsable informó: que Francisco Mesa habia sido juzgado y sentenciado por el delito de asalto, como constaba en la causa

que se remitió al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, según la copia del recibo respectivo que acompañaba, y que si había sido engrillado Mesa, fué por la falta de seguridad en la cárcel de Piedragorda, de la que poco antes se había fugado otro reo de asalto, y porque no estaba prohibido por los reglamentos de cárceles de Estado.—Este informe no era bastante para resolver sobre la violación de todas las garantías individuales que se invocaron, por lo cual á petición del que suscribe, el Juzgado mandó recibir el juicio á prueba en cuyo término el actor promovió una información de cuatro testigos que declararon que Francisco Mesa era hombre honrado, que subsistía de su trabajo; tres dijeron además, que no se había presentado ninguna persona como acusador, y uno, que se había infringido el art. 20 en sus fracciones 3ª, 4ª y 5ª de la Constitución, sin dar la razón de su dicho. La falta de datos para determinar sobre el punto principal del juicio, obligó al que suscribe en el término para alegar ó pedir al Juzgado que, con la calidad de para mejor proveer, recabara del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, copia de la causa instruida á Francisco Meza. Este testimonio se recibió cuando había espirado el término para alegar, y el juzgado se sirvió conceder al que suscribe el término de tres días para presentar su alegato. En cumplimiento de esta determinación, pasa el Promotor fiscal á exponer su parecer sobre la queja de Francisco Mesa.—En su primer escrito, entre los artículos constitucionales que se dice fueron infringidos por la autoridad política de Piedragorda, están el 19 y el 126, los cuales no consignan ninguna garantía individual. En el 19 se hace la declaración general, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, debiendo en consecuencia todas las leyes y todas las autoridades del país, respetar y sostener las garantías que otorga la Constitución. En el 126 se establece, que el pacto federal es la supre-

ma ley en la República, y por tanto los jueces de los Estados deben arreglarse á ella, apesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes de los Estados. A estos preceptos constitucionales se falta siempre que en alguna ley se autoriza la violación de las garantías individuales, ó cuando alguna autoridad atropella dichas garantías, pero no consignándose en ellas ningún derecho del hombre, su infracción no debe reclamarse en un juicio de amparo. Los otros artículos constitucionales de que se hace mención, son el 16, el 20 en su fracción 3ª, 4ª y 5ª y el 22. La violación del 19 de estos artículos, se hace consistir en la incompetencia de la autoridad política de Piedragorda, para juzgar á Francisco Mesa; y para resolver si existe probada esta violación, lo mismo que la del art. 20 en sus fracciones 3ª, 4ª y 5ª, es necesario examinar la causa, cuyo testimonio se ha agregado á las actuaciones. El delito porque fué sentenciado el quejoso á la pena de muerte, es el de asalto en gavilla, no el que consiste en la receptación de ladrones como se dice en el primer escrito.

La sentencia no cita la ley en que se apoya la condenación, sino que en general habla de la ley de suspensión de garantías individuales; pero por la fecha en que se comenzó á instruir el proceso, debe entenderse que se quiso citar la promulgada en tres de Mayo del año próximo pasado.

Esta ley, lo mismo que la anterior que ha suspendido algunas garantías individuales, para los salteadores y plagiarios, exceptuando la de 13 de Abril de 1869, que declaró vigente la de 12 de Marzo de 1861, exigen para la imposición de la pena de muerte, que esté probado el delito. Esta circunstancia es tan necesaria, porque de otra manera, la ley no solo sería injusta, sino anticonstitucional, supuesto que el art. 14 de la Constitución, ordena que las leyes deben aplicarse exactamente al hecho que motive el proceso. En el presente caso en consecuencia, debe existir un hecho que

constituya el delito de plagio ó asalto, para que Francisco Mesa pudiera haber sido juzgado y sentenciado, segun la ley citada.

En el proceso, que en testimonio se ha agregado, no está probada legalmente la existencia de un hecho comprendido en dicha ley.

Los defensores de Francisco Mesa y socios, se esforzaron en demostrar que faltaba la prueba de lo que los criminalistas llaman el cuerpo del delito, base de todo procedimiento criminal, y que es el hecho que constituye el cargo que se hace al procesado; pero sin embargo, la autoridad política de Piedragorda, pronunció un fallo, imponiendo la pena de muerte. Los considerandos de la sentencia, están basados en las constancias, y algunos no son lógicos.

Se dice que está demostrada la existencia de una gavilla de malhechores, despreciando á testigos que afirman lo contrario; que esta gavilla, perpetró varios robos en la Hacienda de Concepcion y la Saucedá, entre ellos uno con asalto, en despoblado, y la autoridad política descuidó hacer constar estos hechos de una manera legal.

Sabido es que para demostrar la existencia del delito de robo con asalto, en despoblado y en gavilla, es necesario probar la preexistencia y falta posterior de las cosas robadas, las circunstancias del asalto, fijar el lugar en que se cometió el delito y el número de malhechores que concurrieron á su perpetracion. No existe ninguna prueba sobre estos puntos, reduciéndose el proceso á una informacion de testigos, cuyos dichos se apoyan únicamente en la fama pública. El Promotor fiscal por estas consideraciones, cree que la autoridad política de Piedragorda no era competente para juzgar y sentenciar al quijoso, tanto mas cuando se ignora aun la época en que se cometieron los delitos que se le atribuyen; de manera que no puede determinarse, si éstos debieron ser juzgados por la ley á que arregló sus procedimientos el Jefe Político de Piedragorda, estando en conse-

cuencia probada la violacion del art. 11 del Pacto Fundamental.

La ley de 2 de Mayo de 1873, suspendió para los salteadores y plagiarios las garantías consignadas en las fracciones del art. 20 de la Constitución; pero no habiéndose aplicado exactamente esta disposicion al juzgar y condenar á Francisco Mesa, estaba en el pleno goce de ellas. En el proceso que se le instruyó aparece, que no se le careó con los testigos que depusieron contra él, y aunque á sus defensores se les dió traslado de la causa, fué por un término tan angustiado, que propiamente no se le facilitaron los datos del proceso para preparar sus descargos. Estos hechos implican las violaciones de las garantías individuales, consignadas en las fracciones 3ª y 4ª del art. 20 citado. El mismo Mesa nombró á las personas que lo defendieran, no resultando por lo mismo infringida la fraccion 5ª de dicho art.

El Jefe Político de Piedragorda, un informe del Alcalde de la cárcel, dice que el quijoso fué engillado. Este hecho opuesto al art. 22 de la Constitución federal, no está justificado, por las razones que se dan en dicho informe. Todos los ciudadanos contribuyen para los gastos de la Administracion y la autoridad está obligada á que las cárceles sean seguras, principalmente en este Estado, donde sobran recursos al Gobierno. El silencio del reglamento de cárceles sobre este punto, tampoco justifica este procedimiento, porque aunque lo autorizara, como opuesto á la Constitución, no podria observarse por ninguna autoridad.

Resumiendo lo expuesto, el Promotor fiscal cree que existe probada la violacion de las garantías individuales consignadas en los arts. 16 y 20 en sus fracciones 3ª y 4ª y la del art. 22 de la Constitución que invocó Francisco Mesa, por cuyo motivo solicita al Juzgado, se sirva concederle el amparo de la Justicia federal que solicita.

Guanajuato, Diciembre 18 de 1874.—  
José Aguilar y Córdova.—Una rúbrica.

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guanajuato, 30 de Diciembre de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido por Francisco Mesa, contra el C. Jefe del Partido de Piedragorda, que le juzgó y condenó á muerte, como salteador, violando segun el quejoso asegura, las garantías que proclaman los arts. 16 y 20 en sus fracs. 3ª, 4ª y 5ª, y 22 de la Constitución, é infringiendo ademas los arts. 1º y 125 del mismo Código; resultando que el peticionario fué procesado en union de otros individuos, por reputárseles miembros de una gavilla de salteadores que merodeaba en el partido de Piedragorda; resultando que se les sugetó en el proceso á los trámites y procedimientos que establece la ley de 23 de Mayo de 1873.

Considerando: que en la averiguacion respectiva, no se justificó hecho alguno de asalto ó plagio; pues si bien es cierto que en ella hace mencion de unos robos acaecidos en los ranchos de Concepcion y Saucedo, no aparece la prueba de la propiedad, preexistencias y falta posterior de los objetos robados, ni las circunstancias de haber intervenido asalto ó violencia, ni la de haber concurrido á perpetrar el delito una cuadrilla de ladrones.

Considerando: que las autoridades políticas no tienen facultad de juzgar y sentenciar á los plagiarios y salteadores, sino cuando fuere probado el cuerpo del delito, segun se infiere de los arts. 1º y 3º de la ley antes citada.

Considerando: que el Jefe del Partido de Piedragorda, es una autoridad incompetente para proceder en juicio contra Francisco Mesa, supuesto que el cuerpo del delito de asalto ó plagio no ha sido debidamente justificado.

Considerando: que por carecer de competencia para juzgar al quejoso, la mencionada autoridad política ha infringido en perjuicio de aquel, la garantía definida en el art. 16 del pacto Federal, que manda que

TOMO VII—PARTE II.

nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, y que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Considerando: que en el proceso se omitieron los cargos del acusado con los testigos de cargo y contraviniendo así á lo que dispone la fraccion 3ª del artículo 20 de la Constitución.

Considerando: que con el hecho de haber engrillado al presunto reo, se lo infringió un tormento prohibido por el art. 22 del mismo Código, y se le impuso una pena, cuya aplicacion no es de la incumbencia de las autoridades políticas, las cuales solamente están autorizadas para decretar penas pecuniarias y correccionales de reclusion, dentro de los límites marcados por la ley.

Considerando: que las fracciones 4ª y 5ª del art. 20 constitucional, no aparecen violadas, porque no se negaron al encausado los datos procesales, ni se lo privó del derecho de defensa; por tales consideraciones y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Francisco Mesa, contra el proceso que le instruyó el C. Jefe del Partido de Piedragorda, juzgándolo y condenándolo á muerte como salteador, con violacion de las garantías que consignan los arts. 16 y 20 en su frac. 3ª y 22 de la Constitución federal. Notifiquese este fallo á las partes, publíquese en el periódico oficial y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales.

Así el C. Juez de Distrito, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato 29 de Enero de 1875.—*Luis G. Medina.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Mayo 28 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Francisco Mesa, contra los procedimientos del Gefe Político de Piedragorda, que con infracción de los artículos 1º, 16 y 20 fracción 3ª, 4ª y 5ª y 126 de la Constitución federal, lo ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte como salteador, violando además el art. 22 del mismo Código, por haberlo engrillado durante su prisión. Visto el informe de la autoridad, el parecer fiscal, el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino: Por sus mismos y legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato en 30 de Diciembre del año pasado, que declaró: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Francisco Mesa, contra el proceso que le instruyó el Gefe Político de Piedragorda, juzgándolo y condenándolo á muerte como salteador.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez*

Es copia que certifico. México, Junio 30 de 1875.—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por Felipe Chavarin y otros, contra el Director Político de Ahualulco, que los condenó á la pena de muerte por los delitos de asalto y homicidio.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez.

El Promotor fiscal dice:

El 2 de Marzo último fueron asesinados en la villa de Ahualulco de Mercado, el extranjero Jhon L. Stephens y el C. mexicano Jesus Islas. Por tal motivo y conforme á la ley especial de 3 de Mayo de 1873, el Director Político de aquella villa procesó y condenó á muerte, entre otros, á José Mª Hernandez, Cornelio Casas, Merced Arias, Quirino Rubio y Felipe Chavarin.

Remitido el proceso al C. Gobernador para que, segun el art. 5º de la ley citada, resolviera sobre el indulto de los reos, este funcionario, cumpliendo con lo prevenido por la frac. 14 art. 28 de la Constitución del Estado y frac. 80, art. 16 de la ley de 25 de Abril de 1868 (Decreto núm. 73), pasó el expediente al Consejo y dicho cuerpo opinó, por mayoría, que debió concederse la gracia á José Mª Hernandez y Cornelio Casas; por unanimidad, que debió negarse á Felipe Chavarin, y en cuanto á Merced Arias y Quirino Rubio, se empató la votación.

El C. Gobernador resolvió en seguida negando el indulto á los cinco reos mencionados, obrando al hacerlo así, conforme al decreto citado núm. 73 respecto á Felipe Chavarin, y en contra del mismo decreto con relacion á los otros cuatro no indultados; pero de conformidad con la consulta del Congreso del Estado de ocho de Abril último, dado con motivo del empate sobre indulto á uno de los asesinos de